

EL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO ⁽¹⁾

EXAMEN JURÍDICO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE
EN EL CASO DEL ILMO. Y RVMO. SEÑOR OBISPO DE SANTA FE,
MONSEÑOR JUAN AGUSTÍN BONEO, ADMINISTRADOR APOSTÓLICO
DE BUENOS AIRES

I.—Finalidad que nos proponemos.

Reiteramos, al comenzar estas líneas, las declaraciones que formulamos en la primera página de esta Circular.

Tenemos un gran respeto por el más Alto Tribunal del país; sus fallos son inapelables y definitivos en el caso particular sobre que recaen, y forman jurisprudencia para casos semejantes que ocurran en lo futuro. Sin embargo, no son infalibles y pueden sancionar un error.

En este caso particular que consideramos, creemos firmemente que ha sido mal planteada la cuestión y erróneamente resuelta.

Es lo que nos proponemos demostrar en este trabajo, con todo el respeto que la Suprema Corte nos merece. Ese error puede ser reconocido y rectificado en otro caso semejante que se someta a su estu-

(1) La oportunidad del tema y el acierto con que han sabido encararlo los CURSOS DE CULTURA CATÓLICA, de esta capital, nos imponen el deber de transmitir a nuestros lectores este trabajo, cuyo mérito sabrán valorar y apreciar debidamente. No es esta la oportunidad de encarecer la obra verdaderamente meritoria que realiza nuestra juventud en esos CURSOS; pero sí creemos un deber de todo católico, sobre todo en las actuales circunstancias, contribuir, en la medida de nuestras fuerzas, a que el criterio católico se fortalezca y sepa mantenerse en la íntima unión debida con las legítimas autoridades de la Iglesia, sin transacciones cobardes, ni debilidades vergonzosas. No dudamos, pues, que nuestros lectores han de agradecernos el que hagamos llegar hasta ellos este trabajo verdaderamente meritorio que transcribimos de *Circular Informativa y Bibliográfica*, correspondiente al mes de marzo de este año, órgano de dichos CURSOS, a cuyos directores y miembros nos complacemos en enviar nuestra más sincera y entusiasta felicitación.—LA REDACCIÓN.

dio, y esto sólo es argumento suficiente para decidirnos si no median razones de mayor trascendencia.

Hacemos uso de un derecho consagrado por la Constitución.

Cumplimos, también, con un deber. Muchos ciudadanos argentinos han sido inducidos a graves errores doctrinales por la resolución de la Suprema Corte, y siempre es un bien la restauración de la verdad, aunque no esté en nuestras manos impedir los efectos jurídicos del error sancionado.

II.—Lo que es un Administrador Apostólico.

El cargo de Administrador Apostólico está descrito y delimitado en todo el capítulo IX del libro II del Código de la Iglesia, titulado «De los Administradores Apostólicos».

Allí está reunido lo que desde muy antiguo se había legislado sobre tales Administradores, en el *Libro Sexto de las Decretales* (promulgado por Bonifacio VIII el 3 de marzo de 1298), en numerosos decretos de la *Sagrada Congregación de Obispos y Regulares*, fechados el 4 de agosto de 1578, el 27 de marzo de 1580, el 8 de abril del mismo año 1580, el 17 de noviembre de 1590, etc., etc., y en otros documentos posteriores.

El Administrador Apostólico no puede ser nombrado más que por la Sede Apostólica, sin intervención de ningún Patrono, por ser de su exclusiva competencia, según lo dispone Bonifacio VIII, en el Sexto de las Decretales (año 1298): *Aquel a quien ha sido encomendada la Procuración o Administración plena y libre de una Iglesia Catedral, en lo espiritual y temporal, por la Sede Apostólica (que tiene para ello exclusiva competencia), puede ejercer libremente todo aquello que es de jurisdicción episcopal y que puede ser ejecutado por un electo confirmado, exceptuando únicamente la enajenación de los bienes inmuebles.*» (L. II, tit. VI, cap. 42).

Según el Derecho Canónico, tanto antiguo como moderno, el Administrador Apostólico es una especie de interventor y asesor subsidiario, a quien la Santa Sede encarga el régimen de alguna diócesis en circunstancias extraordinarias: 1.º para remediar graves irregularidades que hayan tenido lugar en el gobierno de alguna diócesis, o para prevenir algún grave daño espiritual que amenace al Clero o a los fieles, en circunstancias anormales: 2.º para proveer a las necesidades transitorias de alguna Iglesia, en caso de enfermedad o impedimento del Obispo titular, a quien no sea oportuno exigir la renuncia de su cargo: 3.º para proveer de una autoridad más fuerte y res-

petable que la del simple Vicario Capitular a las diócesis cuya provisión se retarda demasiado, con peligro de que surjan bandos o divisiones que relajen la disciplina eclesiástica.

En efecto: el Vicario Capitular no tiene ni los poderes de un Obispo, ni la autoridad de un Obispo. Es un simple sacerdote, que mañana volverá a ser uno de tantos entre sus compañeros. Por otra parte, el Derecho Canónico le concede facultades gubernativas muy limitadas, mandándole el canon 436 *no innovar nada, mientras la sede esté sin titular*.

En estas condiciones, si la vacante durase mucho, y no tuviese el Vicario Capitular ningún apoyo en alguna autoridad fuerte que le guardase las espaldas y tomase sobre sí la responsabilidad de las decisiones más importantes, se vería en grandes apuros para conservar durante mucho tiempo la disciplina. Mucho más si, por una parte, el Vicario Capitular no gozase de buena salud, y por otra el Gobierno ejerciese acción perturbadora entre una porción considerable del Clero y de los fieles.

Este ha sido el caso de Buenos Aires. Veía, por una parte, la Santa Sede que la vacante del Arzobispado se prolongaba desmesuradamente, y que no progresaban las negociaciones para llenarla; por otra parte recibía una solicitud del señor Vicario Capitular, Monseñor Piceda, pidiendo que se le permitiera renunciar su cargo, por motivos de escasa salud y excesivo cansancio; por otra parte, dadas las tirantes relaciones que existían entre la Iglesia y el Gobierno, parecía inconveniente introducir cambios radicales en el personal reconocido por el Gobierno.

En vista de esto, el Papa determinó fortalecer las atribuciones del Vicario Capitular y disminuir sus responsabilidades, conservándole el cargo que tenía, pero asesorándole con un Administrador Apostólico interino.

Una cosa muy semejante pasa en la capital del Brasil, donde el Emmo. señor Cardenal Arcoverde, Arzobispo de Río de Janeiro, está asesorado, a causa de su avanzada edad, por un Arzobispo Auxiliar, que desempeña el cargo de Administrador Apostólico de Río de Janeiro, sin que el Cardenal Arcoverde deje de ser Arzobispo de la misma ciudad.

III.—Administradores Apostólicos «sede plena» y «sede vacante».

Tratándose de Administradores Apostólicos, las fórmulas *sede plena* y *sede vacante* no tienen la misma significación que cuando se trata de los Obispos titulares de las sedes.

En la sede episcopal hay *vacante episcopal* hasta que sea confirmado y tome posesión el nuevo Obispo; y hay *vacante de Ordinario*, cuando no hay Vicario Capitular ni otra persona que ejerza la autoridad *ordinaria*.

Una sede ocupada por el Vicario Capitular está *vacante*, con relación al Obispo titular de la misma; pero está *plena* con relación al Ordinario, que es el mismo Vicario Capitular.

Ahora bien, si el Papa nombra un Administrador allí donde existe algún Obispo o Vicario Capitular, es decir, donde la sede está ocupada por el Ordinario respectivo, se dice que es un Administrador *sede plena*. Si la sede no está ocupada por ningún Ordinario, entonces se denomina Administrador *sede vacante*.

El Papa es libre para nombrar Administrador *sede plena*, sin suspender la jurisdicción del Ordinario; pero, si no consta esta circunstancia en la carta de nombramiento, se suspende dicha jurisdicción desde el momento en que el Administrador toma posesión de su cargo, según el canon 316.

El reciente nombramiento del Administrador Apostólico de Buenos Aires no suspendió la jurisdicción del señor Vicario titular, a pesar de tratarse de un Administrador Apostólico *sede plena*; porque la carta de nombramiento dispone expresamente que siga en su cargo dicho Vicario Capitular. Ahora bien: según el canon 314, *los derechos, obligaciones y privilegios del Administrador Apostólico se toman de la carta de su nombramiento, o, si en ella no se ordena otra cosa expresamente, de lo previsto en los cánones siguientes*, que son el 315, 316, 317 y 318.

Por consiguiente, Monseñor Boneo fué Administrador *sede plena* hasta que murió Monseñor Picada; y después del fallecimiento del que ocupaba la sede, como Ordinario, es Administrador Apostólico *sede vacante*, según se deduce *a fortiori* del canon 318, que dice: *La jurisdicción del Administrador Apostólico no cesa por la muerte del Romano Pontífice o del Obispo*. Así lo había declarado la Sagrada Congregación antes citada, en los decretos del 4 de agosto de 1578, del 17 de noviembre de 1590, del 22 de diciembre de 1628, etc.

Es cosa bien antigua.

IV.—Oportunidad del nombramiento de Administrador Apostólico.

No puede menos de juzgar oportunísima la designación de un Administrador Apostólico para Buenos Aires quien conozca a fondo el estado en que se encontraba la Arquidiócesis: 1.º por los largos años

de semi-vacancia originados por la enfermedad que imposibilitaba para el gobierno a Monseñor Espinosa; 2.º por la interminable vacante arzobispal que ha seguido a su fallecimiento; 3.º por la acción perturbadora de las infiltraciones políticas en una parte del Clero; 4.º por la débil y limitada autoridad que concede el Derecho Canónico a los Vicarios Capitulares, para impedir que durante las vacantes episcopales, los simples sacerdotes que desempeñen aquel cargo tomen providencias que tenga que desautorizar o lamentar el futuro Prelado definitivo; 5.º por las pocas esperanzas que había de que se terminasen pronto y felizmente las tristes negociaciones y los conflictos a que ha dado lugar la provisión del Arzobispado.

Querer que la Arquidiócesis de Buenos Aires siguiese sin Arzobispo y sin Administrador provisorio, era querer el desgobierno de la Iglesia. Sólo un enemigo de la Iglesia podía desear que siguiesen las cosas en aquel estado, muy propicio para la indisciplina y la anarquía.

¿Qué pasaría en una provincia argentina que estuviese largos años sin gobernador efectivo, sin legislatura efectiva y sin poder judicial efectivo? ¿No desearían los ciudadanos honrados, víctimas de aquel estado de cosas, la venida de un *interventor federal* que, con los debidos poderes, restituyese el orden, la disciplina social y el funcionamiento regular de la administración pública?

Pues ese es el caso de Buenos Aires. El Papa ha enviado un *interventor*, en uso de las facultades exclusivas de que está investido por Jesucristo, como sucesor de San Pedro, sin privar por eso de su jurisdicción limitada y precaria al Vicario nombrado por el Cabildo, que no tenía la culpa de la prolongación de la vacante, ni de la natural limitación de sus atribuciones legales para gobernar la sede vacante.

Los Vicarios Capitulares no han sido instituidos por la ley para gobernar por mucho tiempo una diócesis, sino para que no falte una cabeza a la Iglesia, en el breve período en que se tramita la elección del nuevo Prelado titular.

Es un caso realmente extraordinario el que pasa en Buenos Aires, donde se prolonga indefinidamente un conflicto innecesario, lamentable, con la Santa Sede. No es extraño que los casos extraordinarios necesiten providencias extraordinarias.

El Venerable Cabildo Metropolitano apreció en su justo valor la significación de este nombramiento, considerándolo como un acto de bondad paternal del Sumo Pontífice y declarando oficialmente, el 7

de diciembre de 1924, que la Iglesia Argentina *no tiene más que motivos de gratitud hacia el Sumo Pontífice*. (Véase el Apéndice número III.)

El Honorable Colegio de Párrocos de esta Arquidiócesis, reunido en sesión extraordinaria el 10 de diciembre, aprobó por unanimidad una declaración, donde proclama *que se adhiere enteramente a las declaraciones formuladas por el Venerable Cabildo Metropolitano, el 7 del corriente mes, las que interpretan el sentir unánime del Clero de esta Arquidiócesis*. (Véase el Apéndice N.º IV).

Fué, pues, oportunísimo el nombramiento del Administrador Apostólico, según el parecer de las personas que están en situación de apreciar mejor su necesidad.

V.—Diferencia entre el Administrador Apostólico, El Vicario Apostólico y el Delegado Apostólico.

Son tres cargos completamente distintos, con atribuciones y poderes enteramente diferentes.

El *Delegado Apostólico*, de quien habla el Código de la Iglesia en el canon 267, es un representante pontificio, que tiene como única facultad ordinaria vigilar el estado de las Iglesias, dentro del territorio que se le haya señalado, y ponerlo en conocimiento del Romano Pontífice. Sin embargo, el Romano Pontífice le puede conferir extraordinariamente algunas facultades delegadas, que dependen de la libre voluntad del mismo.

El *Vicario Apostólico*, según lo describen los 19 cánones del cap. VII, libro II, del Código de la Iglesia, es el Prelado nombrado por la Sede Apostólica para regir establemente, como si fuera Obispo residencial, los territorios de misiones, que todavía no han sido elevados a la categoría de diócesis. Como su oficio es perpetuo y se equipara con el del Obispo residencial de una verdadera diócesis, manda el canon 293 que su nombramiento se haga por medio de *letras apostólicas*, es decir, por *bula* o *breve*, como es costumbre para los Obispos. En cambio, añade el mismo canon que para los Prefectos Apostólicos bastan las *letras patentes* de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.

Ahora bien: el *Administrador Apostólico* se distingue del Delegado Apostólico: 1.º, en que aquél no es un *enviado pontificio* (*legati qui mittuntur*) como dice el canon 267; 2.º, en que el oficio ordinario del Administrador no es de sola vigilancia, como el del Delegado; 3.º, en que nunca se nombra un Administrador para todas las

Iglesias de todo un territorio o nación o conjunto de naciones, como suelen nombrarse los Delegados Apostólicos. Así, por ejemplo, el Cardenal Bonzano ha sido durante largos años Delegado Apostólico en Estados Unidos, y Monseñor Marino Marini fué Delegado Apostólico en los territorios del Río de la Plata. En cambio el Administrador Apostólico se nombra para una sola diócesis determinada.

En segundo lugar, el Administrador Apostólico se distingue del Vicario de tierras de misiones, 1.º en que el Vicario se equipara a un Obispo residencial y el Administrador no se equipara, por ser siempre un cargo subsidiario y no primario; 2.º el Vicario Apostólico ha de ser nombrado por *letras apostólicas*, según el canon 283, y el Administrador Apostólico no necesita tales letras en forma de bula ni breve, sino le basta una *carta* en que conste su designación, como se dice en el canon 313; 3.º el Vicario Apostólico se nombra para tierra de misiones, mientras que el Administrador Apostólico no puede ser nombrado en tierra de misiones, porque dice expresamente el canon 312 que recibe la *comisión* (*committit*) de regir *una diócesis erigida canónicamente*. Ahora bien, las tierras de misiones son tierras de misiones, precisamente porque no tienen diócesis erigidas canónicamente.

Si consultamos la Guía Eclesiástica de España, que no es tierra de misiones y tiene sus diócesis erigidas tan canónicamente como la Argentina, desde muchos siglos antes que la Argentina, tropezaremos con varios Administradores Apostólicos. Hay Administrador Apostólico en Calahorra, antiquísima diócesis, patria del famoso escritor latino Quintiliano y del primer poeta cristiano Prudencio. Hay también Administrador Apostólico en Ciudad Rodrigo, ciudad episcopal de la provincia de Salamanca y patria de Covarrubias.

VI.—El verdadero concepto de Administrador Apostólico y los argumentos de la Suprema Corte.

La Corte Suprema, en su fallo, confunde al Administrador Apostólico con el Vicario Apostólico de tierras de misiones y con el Delegado Apostólico. Es lo mismo que si confundiera al Interventor Federal u otro funcionario federal por la sencilla razón de que las tres entidades son federales.

Dice la Corte Suprema, después de transcribir la carta de nombramiento de Monseñor Boneo, y conociendo bien su texto: *Se infiere de lo transcripto que se habría dado el título de Administrador Apostólico a un funcionario eclesiástico conocido desde tiempo inmemo-*

rial con el nombre de Vicario Apostólico y cuya autoridad y disciplina alcanzan a todos los Obispos de la República. Después amplía este concepto con el ejemplo de Monseñor Marino Marini, Delegado Apostólico enviado de Roma al Río de la Plata, con facultades extraordinarias para remediar el estado de anarquía en que se hallaban estas provincias en su período de formación nacional. Y luego, como si esta confusión no fuera suficiente para oscurecer el asunto, cita y aprueba, como *concluyentes*, las siguientes palabras del fiscal Agrelo: «Estos Vicariatos sólo se conocen en los países de misión, o en algunas iglesias aisladas que se encuentran dispersas en unos países protestantes».

De donde resulta que la Corte Suprema, quizá por no haber leído el texto de las leyes de la Iglesia, ni haberse fijado bien en el texto del nombramiento de Monseñor Boneo, ha creído que Monseñor Boneo es un Delegado Apostólico, enviado de Roma con jurisdicción extraordinaria sobre todos los Obispos de la República; y al mismo tiempo, por una equivocación que no me explico, ha creído que es un Vicario Apostólico de los que rigen las tierras de misiones.

Lamentamos tan graves errores, que se podían haber evitado con sólo leer el Código de la Iglesia, siquiera para conocer el valor de los términos que ella emplea. Porque no es posible suponer que la Corte Suprema ha querido inferir al Papa la injuria de imaginar que se ha servido de un trampantojo de nombres, para engañar al Gobierno. El Papa se ha ajustado estrictamente a lo que dispone el Código de la Iglesia, y a lo que es un derecho suyo, reconocido por las mismas Leyes de Indias y por el Concilio Tridentino, como lo probaremos a continuación.

VII.—El cargo de Administrador Apostólico está reconocido por el Concilio Tridentino y por las Leyes de Indias, que según la Suprema Corte, tienen fuerza de ley en la Argentina.

El cargo de Administrador Apostólico es más antiguo de lo que imagina la Corte Suprema.

Están reglamentadas sus facultades en el Código de las Decretales, desde el año 1298, casi dos siglos antes del descubrimiento de América.

Ya hemos citado, en el párrafo II de este folleto, el canon *Is cui Procuratio seu Administratio* (c. 42, t. VI, lib. I in Sexto) donde se dice que la Administración plena y libre de una Iglesia Catedral no puede ser concedida más que por el Romano Pontífice.

El canon *Ecclesiae cathedrali vacanti* (c. 4, tit. VIII, lib. I in Sexto) admite, además del Administrador nombrado por el Papa, que es el único Administrador Apostólico, un Administrador Arquiepiscopal, nombrado con facultades limitadas, durante la vacante, por el Arzobispo respectivo en caso de *negligencia o malicia* del Cabildo. Dicho Arzobispo *podrá disputar para la misma Iglesia un Visitador o Administrador (Visitatorem seu Administratorem)*; pero tal Visitador o Administrador no podrá conferir beneficios que sean de colación episcopal *si hubiere sido nombrado por otro que por el Romano Pontífice (si ab alio quam a Romano Pontifice fuerit deputatus)*.

Existen, pues, según el Código de las Decretales, dos clases de Administradores, a quienes se puede encomendar el régimen de una Iglesia Catedral vacante. Puede nombrarlos el Arzobispo respectivo (y cuando vaca el Arzobispado recae esta facultad en el decano de los Obispos); pero sólo en caso de negligencia o malicia del Cabildo y con facultades limitadas. Puede también nombrarlos el Sumo Pontífice, aun fuera del caso de negligencia o malicia del Cabildo y con facultades plenas, como se ha hecho con Monseñor Boneo.

Ahora bien: el Derecho de las Decretales ha sido conservado intacto por el Concilio Tridentino en todo aquello que no deroga especialmente, y ante todo ha sido declarado solemnemente por el mismo Concilio en el último decreto de Reformación, que no se ha alterado ninguno de los derechos de la Sede Apostólica. *Por último (dice) el Santo Sínodo declara que todas y cada una de las cosas que han sido decretadas en este Santo Concilio, con cualesquiera cláusulas y palabras, sobre la reforma de costumbres y la disciplina eclesiástica, han sido decretadas de tal modo que esté y se juzgue estar siempre salva en ellas la autoridad de la Sede Apostólica.* (Sesión 25, capítulo 21).

De donde se deduce que ninguno de los derechos Pontificios consignados en el Código, entonces vigente, de las Decretales, fué derogado por el Concilio de Trento, sino todos solemnemente confirmados.

Y como las Leyes de Indias y la legislación argentina reconocen vigencia legal al Concilio Tridentino, resulta que, según la legislación vigente en la República Argentina, el Papa puede nombrar Administradores Apostólicos en el territorio de la Nación.

Antiguamente era casi imposible nombrar Administradores Apostólicos en las Indias Occidentales, por las dificultades de las comunicaciones con Roma y por el escaso conocimiento que se tenía allí de las regiones americanas; porque el único Nuncio de la inmensa

monarquía española, extendida por las cinco partes del mundo, residía en Madrid, y mal podía enterarse debidamente de lo que pasaba en estas apartadas regiones, casi incomunicadas con el resto del orbe.

Pero ahora puede ejercitar fácilmente el Papa los derechos imprescriptibles de su soberanía espiritual, por medio del correo directo y frecuente, vapores numerosos y veloces, telégrafo rapidísimo, representantes diplomáticos residentes en medio de nosotros, etc., etc. No estamos en los tiempos del coloniaje.

VIII.—La noción de breve y los argumentos de la Suprema Corte.

La Suprema Corte es la encargada de dar la explicación definitiva del artículo 86, inciso 9, de la Constitución Argentina, que trata de la concesión del pase a las *bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice de Roma*; pero desgraciadamente demuestra en su fallo que no sabe lo que es un *breve*.

El *breve* es un documento solemne que no puede ser expedido más que por la *Secretaría de Breves*, anexa a la Secretaría de Estado del Sumo Pontífice, como puede verse en los cánones 263 y 264.

Ni los Nuncios ni las Sagradas Congregaciones Romanas pueden expedir *breves*.

Tienen que ir encabezados con el nombre del Pontífice y su número de orden. Tienen que estar sellados con el sello rojo del Pescador. Como se expiden con la fórmula *ad perpetuam rei memoriam* («para perpetua memoria») y están destinados a durar siglos en los archivos, se escriben en pergamino de una sola hoja cuadrilonga.

Se llaman *breves*, por comparación con las *bulas*, que, según el estilo de Curia, tienen prescriptas cláusulas más solemnes, y se escriben en pergamino más grueso y más grande.

Las *bulas* no pueden ser expedidas por la Secretaría de Breves, sino por la Cancillería o la Dataría Apostólica. Como son los documentos más importantes y solemnes que firma el Papa, llevan un sello especial, impreso en una medalla colgante de materia muy duradera, que ordinariamente suele ser de plomo y a veces de oro. Se toman todas las precauciones para que el documento y sus sellos sean indestructibles, y duren *ad perpetuam rei memoriam*.

Ahora: bien la Corte Suprema afirma en su fallo, que la simple carta de nombramiento, redactada, expedida y firmada por el señor Nuncio en Buenos Aires, y copiada por ella en su mismo fallo, es nada menos que *el breve que instituye Administrador de la Arquidiócesis de Buenos Aires*.

Lamentamos el error y su funesta influencia en la interpretación de la Constitución; pero no podemos negar su existencia.

IX.—La Constitución no exige el pase al nombramiento de Monseñor Boneo.

La exigencia del pase, por lo mismo que ha sido reprobada por la Iglesia, desde hace siglos, como un insulto a su soberanía espiritual, debe ser, para un jurista, de interpretación estricta, según la clásica regla de derecho: *Odia sunt restringenda*, es decir, *Lo odioso se ha de restringir a la menor extensión posible*.

Ahora bien: los autores de la Constitución sabían perfectamente que existían otros muchos documentos eclesiásticos, fuera de los cuatro, para los cuales exigieron el pase. No ignoraban que existían Encíclicas, Decretales, Mandatos, Motuproprios, Letras Patentes, Sentencias, Quirógrafos, Constituciones Apostólicas, etc., etc. Sin embargo, sabiendo todo esto, no quisieron exigir el pase para ninguno de esos documentos, ni siquiera con alguna frase general, por el estilo de esta: *y otros documentos pontificios*, o también, *etc., etc.*

Se contentaron con escribir simple, concreta y taxativamente, estas palabras: *El Presidente de la Nación... concede el pase o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo de la Suprema Corte*.

Sería insensato decir que los autores de la Constitución no conocían más documentos eclesiásticos que esos.

No sería menos insensato afirmar que en esos cuatro documentos están comprendidos todos los documentos que suele expedir la Iglesia.

Falta además el *etc.* u otra frase equivalente que incluya en general las demás clases de documentos.

Por consiguiente, los constituyentes quisieron *ex professo* y a sabiendas que no se exigiese el pase más que a las cuatro clases de documentos enumeradas taxativamente.

Ahora bien: el nombramiento de Monseñor Boneo, ni se ha hecho ni podía haberse hecho de ninguna de las cuatro maneras indicadas por la Constitución.

No puede haber sido nombrado por ningún Concilio: en primer lugar, porque hace muchos años que no se ha reunido ningún Concilio; en segundo lugar, porque ningún Concilio puede nombrar un Administrador Apostólico, que, por su misma definición, es un Administrador nombrado por el Papa, y no un Administrador Conciliar.

No puede haber sido nombrado por Bula o Breve: 1.º porque el canon 313 menciona simplemente una *carta*, sin ningún adjetivo que

imponga la solemnidad de la Bula o Breve, diciendo: *ostendens litteras suae nominationis*; y es bien sabido que, en la lengua latina, la palabra *littera*, sin ningún aditamento, significa sencillamente *carta*; 2.º porque es impropio y hasta ridículo exigir pergaminos, sellos indestructibles, el anillo del Pescador, la intervención de la Cancillería Apostólica, Dataría Apostólica y Secretaría de Breves, para un nombramiento tan fugaz y provisorio como el de un Administrador, que ha de cesar automáticamente en su cargo, apenas quiera el Gobierno activar la provisión del Arzobispado. Puede durar pocas semanas, si la provisión se hace amistosamente y con mutua inteligencia. ¿Para qué entonces usar documentos solemnes de pergamino, *ad perpetuam rei memoriam*, con intervención de tantos y tan altos personajes?

Lo natural y procedente es lo que ha pasado: el señor Nuncio ha recibido un mandato telegráfico, para extender la carta correspondiente, y el señor Nuncio ha cumplido al pie de la letra el mandato apostólico. Eso basta para nombrar un Administrador Apostólico, según el canon 313, y según el sentido común. (Véanse los Apéndices I y II).

Tampoco es posible nombrar por un *rescripto* a un Administrador Apostólico. En efecto el *rescripto*, como lo indica su etimología (*retro scriptum*, es decir, escrito detrás, o al pie de la solicitud respectiva) y según lo definen los juristas, *es la respuesta dada por el Sumo Pontífice a la súplica, exposición o consulta de alguien*. (Bargilliat, Praelect. Juris Canonici, tomo I, N.º 411, París 1909).

Es absurdo suponer que el Ilmo. señor Obispo de Santa Fe ha elevado al Papa una solicitud, pidiendo para sí el cargo de Administrador Apostólico de Buenos Aires, y que el Papa le ha contestado por escrito concediéndole esta gracia. Estas cosas no las pide nadie, aunque no sea persona tan seria y respetable como el señor Obispo de Santa Fe; ni mucho menos las concede el Sumo Pontífice por *rescripto* a quienes se las pidan.

En vista de todo lo dicho:

1.º es impropio nombrar un Administrador Apostólico interino por decretos de Concilios, por Bulas, Breves o Rescriptos, según queda demostrado;

2.º de hecho, Monseñor Boneo no ha sido nombrado por ningún decreto de Concilio, ni Bula, ni Breve, ni Rescripto, como puede verse por el examen de los documentos mismos, transcritos en los Apéndices I y II;

3.º el precepto constitucional aludido es de carácter odioso para la Iglesia que sostiene el Estado, por mandato de la misma Constitución; y por lo tanto, según las normas jurídicas, al interpretar su sentido, no debe tenderse a ampliarlo, sino a restringirlo;

4.º por lo tanto el nombramiento de Monseñor Boneo es de los que no exigen el pase del Presidente de la Nación, con acuerdo de la Corte Suprema.

X.—La Corte Suprema está en desacuerdo con el Procurador General de la Nación.

Dictaminó el señor Procurador General que la Suprema Corte no tenía nada que hacer en el asunto de Monseñor Boneo, porque no había presentado ninguno de los documentos que señala taxativamente la Constitución. *Considerando (dice) que los documentos presentados por S. S. Ilma. Monseñor Boneo no revisten los caracteres de los decretos de los Concilios, ni de las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice, que menciona la Constitución Nacional en su artículo 86, inciso 9.º, estimo que no corresponde a V. E. prestar en el presente caso el acuerdo que prescribe la antecitada disposición constitucional, y en consecuencia pido a V. E. se sirva así declararlo, y mandar se devuelvan estos antecedentes al ministerio de origen.*

La Suprema Corte hizo caso omiso del dictamen del Procurador General; y en lugar de devolver sencillamente los documentos, para cuyo examen no era competente, redactó la resolución cuyos fundamentos examinamos, dando al Poder Ejecutivo consejos funestos de gravísimas consecuencias.

Lo único que debía haber aconsejado la Corte Suprema es que, para la provisión de cargos interinos, el Poder Ejecutivo suele entenderse con el Cabildo Metropolitano; y que, por lo tanto, el señor Ministro consultase el punto con dicho Cabildo, y que reconociese interinamente la autoridad que dicha Corporación acatase, y en la forma y medida en que ella lo acatase, porque se ha de suponer que el Cabildo ha de saber, en cosas de régimen eclesiástico, algo más que los políticos.

XI.—La Suprema Corte no está de acuerdo consigo misma.

Lamentamos que la Corte Suprema se contradiga abiertamente dentro de un mismo fallo.

Dice en una parte: *Los documentos relacionados no reúnen las formas tradicionales de las bulas o de los breves.*

Pero después de unos párrafos, se olvida de todo esto y dice: *El*

breve que instituye Administrador de la Arquidiócesis de Buenos Aires... motiva las siguientes observaciones.

La contradicción es evidente.

Copia la Suprema Corte al principio de su fallo la clarísima explicación de lo que significa la cláusula *sede plena*, cuando se trata de los Administradores Apostólicos, nombrados en *sede ocupada* por un Ordinario cualquiera, aunque no sea el Obispo Titular de ella, y dice: *Debiendo observarse todas las prescripciones del Código de Derecho Canónico relativas a los Administradores Apostólicos nombrados a beneplácito de la Santa Sede y constituidos con plenitud de potestad, como en diócesis sede plena, es decir, con respecto al caso presente, perdurando, con arreglo a los sagrados cánones, en su cargo de Vicario Capitular el Reverendísimo señor doctor Bartolomé Piceda.*

De aquí se deduce que *sede plena* significa únicamente que *perduraba en su cargo* Monseñor Piceda, a pesar del nombramiento de Monseñor Boneo.

Pero en el cuarto párrafo la Suprema Corte se olvida completamente de la noción presentada en el primero, y escribe: *Como en diócesis sede plena, es decir, con todos los derechos, honores y prerrogativas del Metropolitano.*

Ya se ve que la frase *sede plena* ha cambiado súbitamente de significado, y no quiere decir ya solamente que la sede sigue ocupada por el señor Vicario Capitular, sino que tenemos un verdadero Arzobispo con todas sus prerrogativas. Lo cual es falso.

¿Y por qué dice *con plenitud de potestad*? Ya lo explicamos antes, al declarar que, según las decretales de Bonifacio VIII, desde el siglo XIII se nombran los Administradores Apostólicos con plenitud de potestad, para distinguirlos de los Administradores nombrados por los Metropolitanos, en caso de negligencia del Cabildo, los cuales tienen restringidas sus facultades por las mismas decretales, que eran admitidas, tanto por el Concilio Tridentino, como por las Leyes de Indias.

XII.—La exacta definición de «beneficio» y su concepto en la Suprema Corte.

La Corte Suprema, en el párrafo en que determina *la extensión y contenido del derecho de patronato*, supone que el cargo de Administrador Apostólico es un *beneficio eclesiástico*, y que por consiguiente no puede ser conferido sin presentación o nombramiento del Gobierno.

Este concepto es falso. Veamos cómo definen el beneficio los mejores canonistas.

Francisco Santi lo define así: *Un derecho perpetuo establecido por la autoridad eclesiástica para percibir los frutos de los bienes eclesiásticos por el desempeño de un oficio sagrado.* (Praellect. Juris Can., tomo III, p. 73. Ratisbona, 1905.)

Wernz dice que el beneficio se define: *El derecho perpetuo de percibir los réditos de los bienes de la Iglesia, anexo por autoridad eclesiástica a un oficio sagrado o espiritual.* (Jus Decretalium, tomo II, N.º 240.—Roma, 1906.)

De aquí se deduce, en primer lugar, que el Gobierno Argentino no tiene derecho de presentar para ningún beneficio eclesiástico, puesto que no existe en el presupuesto ningún beneficio eclesiástico. Para ello, es necesario que el derecho de percibir los frutos de los bienes eclesiásticos haya sido establecido por la misma Iglesia, y no por la ley civil y por la libre y variable voluntad de los señores Diputados y Senadores que votan el presupuesto.

En segundo lugar, el Gobierno no entrega el presupuesto de Culto como rédito de los bienes eclesiásticos de que despojó a la Iglesia, ni quiere confesar que es una restitución de bienes usurpados, ni ha hecho ningún arreglo con la Iglesia para determinar el monto de los réditos de los bienes eclesiásticos. Luego está fuera de lugar hablar de beneficios, donde no hay más que desconocimiento de los antiguos beneficios eclesiásticos, incautados por el fisco.

En tercer lugar, aunque existieran en el presupuesto verdaderos beneficios eclesiásticos, el cargo de Administrador Apostólico, conferido a Monseñor Boneo, no es perpetuo; y todo beneficio, por definición, tiene que ser perpetuo.

XIII.—Lo que es una «dignidad» en Derecho Canónico.

La Corte Suprema, en su fallo, dice que el cargo de Administrador Apostólico es una dignidad; y no sólo el cargo de Administrador, sino hasta el de Delegado del Administrador, de tal modo que uno de sus cargos contra Monseñor Boneo es que ha acumulado dos dignidades en Monseñor Piceda, contra lo que disponen las Leyes de Indias, de las que no se han librado todavía los canónigos.

Pero la Corte Suprema tiene un concepto muy equivocado de lo que es una dignidad. He aquí cómo las define el excelente canonista Santi: *Las dignidades son beneficios que tienen anexa alguna jurisdicción y preeminencia de honor* (libro citado, pág. 77).

No puede haber dignidad donde no hay beneficio; no hay beneficio donde no hay derecho perpetuo a percibir los réditos de los bienes eclesiásticos por establecimiento de la Iglesia.

No hay tal beneficio, ni tal perpetuidad, en el cargo de Administrador Apostólico, ni mucho menos en su Delegado. Por consiguiente, no existe tal nueva dignidad, ni en el uno ni en el otro.

XIV.—El juramento de Monseñor Boneo no le obliga a pedir el consentimiento del Gobierno para aceptar el cargo de Administrador.

La Corte Suprema se hace eco del argumento con que el señor Ministro de Relaciones Exteriores y el señor Procurador General de la Nación intentaron probar que Monseñor Boneo estaba obligado a no aceptar el nombramiento de Administrador, por el juramento de no aceptar ninguna otra dignidad sin consentimiento del Gobierno, que suele ser exigido por éste a todos los Obispos.

Pero ya hemos probado que el cargo de Administrador Apostólico interino, ni es beneficio, ni es dignidad. Por consiguiente, puede aceptarlo el señor Obispo, lo mismo que otra comisión cualquiera, sin faltar a su juramento.

XV.—El verdadero concepto de «presentación».

Cree la Corte Suprema que para que pueda ser nombrado en la Argentina un Administrador Apostólico interino, se necesita terna del Senado y presentación del Presidente hecha ante el Romano Pontífice.

Se funda para ello en el inciso 8 del artículo 86 de la Constitución, que dice así: *El Presidente de la Nación... ejerce los derechos del Patronato Nacional en la presentación de Obispos para las Iglesias Catedrales, a propuesta en terna del Senado.*

Sobre este texto, arguye así la Corte Suprema: *El inciso 8 del artículo 86 no distingue (entre definitivo y transitorio), y con arreglo a su espíritu, nadie puede desempeñar la doble potestad de orden y jurisdicción inherente a los Obispos o Arzobispos dentro de la Nación, por tiempo breve o largo, provisional o definitivamente, sin que haya mediado la presentación del Patrono.*

Esta interpretación es errónea. Ni se ha hecho jamás hasta ahora terna del Senado y presentación del Gobierno para un cargo transitorio, ni se hará jamás en adelante, ni puede hacerse en derecho.

La presentación es una institución jurídica de orden esencialmente eclesiástico; porque es eclesiástico el presentado, eclesiástica la autoridad ante quien se presenta y eclesiástico el cargo para el cual

se presenta: Ahora bien: la presentación eclesiástica se hace siempre para un cargo definitivo y perpetuo, que se confiere por *institución canónica*. *El que ha sido presentado legítimamente* (dice el canon 1466), y *hallado idoneo, una vez aceptada la presentación, tiene derecho a recibir la institución canónica*.

Es imposible presentar para la sede de Buenos Aires ni para ninguna sede, un Obispo provisional, ni concederle una institución canónica provisional. Eso es contrario a toda la legislación que la Corte Suprema admite como vigente en la República. No admiten tal presentación de Obispos provisionales ni las Leyes de Indias, ni el Concilio Tridentino, ni el Código de las Decretales.

Ni la admitiría tampoco el Senado ni el señor Presidente si llegase el caso. Supongamos que cuando murió Monseñor Espinosa, hubiera seguido en su cargo de Obispo Auxiliar Monseñor Alberti, y que el Cabildo lo hubiera elegido Vicario para el período de vacancia. En tal caso Monseñor Alberti hubiera desempeñado interinamente *la doble potestad de orden y jurisdicción inherente a los Obispos o Arzobispos dentro de la Nación*, como dice la Corte Suprema. Por consiguiente, según la Corte Suprema, tendría que ser presentado por el Patrono. ¿Ante quién? No lo sabemos, ni lo dice la Corte Suprema. Además, como la presentación del Patrono tiene que hacerse en terna del Senado, este respetable cuerpo tendría que hacer una terna de posibles Vicarios en que entrase Monseñor Alberti, para que pudiese desempeñar interinamente la doble potestad de orden y jurisdicción. Pero tal clase de terna, nunca vista, sería para hacer otra cosa nunca vista, que sería la presentación del Presidente ante el Cabildo, seguida del examen del candidato por el Cabildo y su posible rechazo si lo juzga inidóneo, y la nueva petición de terna al Senado, y las consiguientes molestias y pérdidas de tiempo para proveer un interinato, que sólo durará el tiempo necesario para tramitar otra presentación de Obispo definitivo, con otra terna del Senado.

No sospecha la Suprema Corte las complicaciones jurídicas que se derivan de su decisión ni las obligaciones insufribles que ha echado sobre los hombros del señor Presidente y de los señores Senadores.

XVI.—El caso de Catamarca.

Todas estas complicaciones innecesarias se hubieran evitado fácilmente, si el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, después de la renuncia del candidato para el Arzobispado, hubiera seguido las mismas normas que adoptó antes de la renuncia.

Monseñor Piedrabuena, Obispo de Tucumán, fué nombrado Administrador Apostólico de Catamarca, lo mismo que después fué nombrado Monseñor Boneo Administrador Apostólico de Buenos Aires. El señor Ministro no creyó entonces que eso fuese contrario a la Constitución, ni a las Leyes de Indias ni al Concilio Tridentino (como en efecto hemos demostrado que no lo es) y reconoció tranquilamente al señor Administrador Apostólico de Catamarca, que sigue desempeñando su oficio sin ningún tropiezo.

Sólo aparecieron las Leyes de Indias y el Concilio Tridentino después de la renuncia y el conflicto consiguiente; pero no han hecho más que aumentar el conflicto y añadir a él un semillero de nuevos conflictos, por haber provocado la intervención de la Corte Suprema, que ha sancionado una jurisprudencia digna de lamentarse profundamente.

Mejor hubiera sido que el señor Ministro no hubiera cambiado de conducta. Todos estaríamos más tranquilos y contentos, como lo están los catamarqueños, aunque no se les hayan aplicado las Leyes de Indias.

XVII.—Es absurdo obligar al Cabildo Metropolitano a no reconocer ninguna ley eclesiástica posterior a las Leyes de Indias.

Declara la Corte Suprema que la República Argentina no reconoce más leyes eclesiásticas que las promulgadas por el Concilio Tridentino, las cuales comenzaron a obligar el 1.º de mayo de 1564, y las contenidas en las Leyes de Indias, cuya última recopilación se terminó en 1680.

Desde entonces no existe ninguna legislación eclesiástica para la Corte Suprema. La Iglesia está necesariamente petrificada en aquellas antiguas leyes, sin que tenga derecho a progresar; ni a reformar sus leyes, ni a completarlas, ni a imponerlas a sus súbditos.

El Cabildo Eclesiástico está obligado, según la Corte Suprema, a desobedecer a las leyes vigentes de la Iglesia.

La Corte Suprema pone al Cabildo Eclesiástico y a todos los católicos de la República, en la necesidad de elegir entre el mandato de Dios y el mandato del César; y en tal caso, la norma está dada por el sentido común y por la conducta del Colegio de los Apóstoles: los cuales, en una ocasión semejante, habiéndoles declarado el Sanhedrín (que era equivalente a la Corte Suprema de nuestro pueblo) que no les era lícito obedecer los mandatos de Cristo, contestaron con toda dignidad: *Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres.* (He-

chos de los Apóstoles, V, 9.) Y desobedecieron el injusto mandato. Los encarcelaron y los azotaron; pero volvieron a desobedecer. Intervino el César con sus leyes y su espada; sancionó sus leyes con pena de muerte; pero los Apóstoles e innumerables cristianos desobedecieron al César y perdieron la vida en los más atroces suplicios, antes de consentir en obedecer al César antes que a Dios.

Por lo demás, la República Argentina será una de las pocas naciones del mundo en que se desconoce la existencia y validez del sapientísimo Código de la Iglesia, para regir los actos eclesiásticos del Clero y de los fieles.

Todas las naciones civilizadas han mirado como un gran progreso la codificación breve y nítida de toda la disciplina eclesiástica, esparcida antes en numerosos códigos parciales, como las Decretales, el Sexto, las Clementinas, las Extravagantes, el Concilio Tridentino, los decretos de las Congregaciones Romanas, el Bulario, etc., etc.

Ahora, por los gigantescos esfuerzos de una comisión de juristas, nombrada por el Sumo Pontífice Pío X, todo ese inmenso material legislativo ha quedado reducido, sin alteración substancial, a 2.414 cánones breves, nítidos y concordantes, que fueron promulgados por Benedicto XV el día de Pentecostés del año 1917.

La República Argentina desconoce el valor de ese Código, para los sacerdotes y católicos de la Argentina, encerrándolos en la anticuada legislación de Indias.

España, de donde salió la legislación de Indias, decretó hace años que las relaciones del Estado, de los ciudadanos y de los tribunales con la Iglesia se rigiesen en adelante conforme al nuevo Código de la Iglesia, que es un verdadero alivio para los jueces y magistrados, que tienen que intervenir en causas matrimoniales, testamentarias, etc., etc., estrechamente vinculadas en España con las normas de la Iglesia.

Las leyes del Estado, que estén en discordancia con este Código, se consideran abolidas, *ipso facto*, para no someter a los españoles, que son en su inmensa mayoría católicos, a dos normas contrarias dictadas por dos superiores comunes.

¿No podría la Argentina permitir siquiera que el Cabildo Eclesiástico observase las leyes de la Iglesia, sin exigirle que las desobedezca? ¿No sabe el Estado que no es él quien rige las conciencias de los católicos, sino un Superior Espiritual señalado por Jesucristo en la persona de San Pedro, a quien entregó las llaves de la Iglesia y le confió el cuidado de toda su grey? ¿Puede ignorar esto una

Nación, que, por precepto constitucional, sostiene el culto católico y tiene que tener necesariamente un Poder Ejecutivo católico?

Por doloroso que sea consignarlo, no se puede negar que la Corte Suprema tiene una idea bien extraña de lo que es el Jefe de la Iglesia Católica, a juzgar por estas palabras de su fallo: *El canon 312 transcripto... entrega prácticamente el gobierno y dirección de la Iglesia Argentina al Sumo Pontífice.*

¿Y de eso se extraña la Corte Suprema? ¿No sabe que Jesucristo hizo eso mismo, y no se le ocurrió entregar al Estado las llaves de su Iglesia, ni encomendó al César de Roma, ni a su Procurador Poncio Pilato, la dirección de su grey? ¡Pobre Iglesia de Cristo! ¡Qué raro concepto se tiene de ella en tan altas esferas!

XVIII.—Es injusto obligar al Papa a que acepte toda la legislación argentina, y declarar al mismo tiempo que la Argentina no reconoce la legislación de la Iglesia.

La Corte Suprema borra de una sola plumada toda la legislación eclesiástica posterior a las Leyes de Indias, dictadas por los reyes de España. Toda esa legislación carece de fuerza obligatoria para los católicos de la Argentina.

En cambio el Papa está obligado a observar las Leyes de Indias y toda la legislación argentina posterior a las Leyes de Indias.

Esto es tratar al Papa como a un súbdito del Gobierno en el régimen de la Iglesia.

Esto equivale a negar al Papa hasta el principio de igualdad y reciprocidad que gobierna las relaciones diplomáticas de todas las naciones.

La Corte Suprema no ha podido negar el pase al Código vigente de la Iglesia Universal; porque no es ninguno de los documentos enumerados taxativamente por el inciso 9 del artículo 86 de la Constitución, que solamente señala los decretos de los Concilios, las bulas, breves y rescriptos. El Código no es ninguno de esos documentos. No es posible suponer que los autores de la Constitución hubieran querido desconocer toda la legislación de la Iglesia en bloque, imponiendo al mismo tiempo a la Iglesia la obligación de reconocer toda la legislación argentina.

XIX.—La Corte Suprema pone al señor Presidente de la Nación en la necesidad de ser infiel a la fe, que, según la Constitución, debe profesar.

El artículo 76 de la Constitución obliga al señor Presidente y Vicepresidente de la Nación a *pertenecer a la comunión católica apostólica romana.*

Por consiguiente, hemos de partir de la base de que son sinceramente católicos apostólicos romanos.

Sin embargo la Corte Suprema los obliga a desconocer toda la legislación vigente de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Ni se contenta con esto. Le dice al señor Presidente, que la doctrina de las cartas de *ruego y encargo*, que entregarían la administración de las diócesis a los presentados, antes de ser confirmados por el Papa, es una doctrina condenada por Pío IX en el *Syllabus*, y por lo tanto eternamente e irrevocablemente anticatólica; sin embargo le declara al mismo tiempo la Corte Suprema, que esas cartas constituyen un derecho *imprescindible* del señor Presidente.

Con esto pone al señor Presidente en esta alternativa: o es traidor a la fe que debe profesar por mandato de la Constitución, y pasa por encima de la doctrina condenada, o determina no ejercitar este derecho *imprescriptible*, exponiéndose a que en la prensa, en las tribunas y en las Cámaras se le acuse de traidor a los derechos imprescriptibles de la Nación.

La alternativa en que la resolución de la Suprema Corte coloca al Presidente de la Nación podría llegar a términos contradictorios y lamentables, si el Poder Ejecutivo decidiera ejecutar estrictamente lo que se le indica. El Derecho Canónico tiene establecidas las sanciones en que incurren los católicos que desconocen los poderes del Administrador Apostólico. Si el Santo Padre lo quisiera podría aplicar esas sanciones, que llegan hasta la excomunión al Presidente de la República como católico, el cual quedaría por este hecho fuera de la Iglesia. ¿Cómo podría coordinarse esta situación con las disposiciones de la Constitución Nacional, que exigen que sea católico el Presidente de la Nación?

XX.—Las cartas de ruego y encargo.

Estas cartas, que ha resucitado en su fallo la Corte Suprema, constituyen una de las pocas manchas que afean la respetable Recopilación de Indias.

Esa disposición real es inválida, porque no está contenida en la bula de Julio II que concedió el Patronato, sino que es una extensión de sus atribuciones, hecha unilateralmente por el rey, y no reconocida por el Papa, autor del privilegio del Patronato.

Añade la Suprema Corte: *Esta facultad reconoce su causa o razón de ser en un canon eclesiástico, que a título de excepción, autoriza al elegido para una dignidad de la Iglesia a administrarla en lo espi-*

tual o temporal, cuando la Iglesia está fuera de Italia, lejana de la Santa Sede.

Es incompleta y falsa la alegación de la Suprema Corte. Se refiere al canon *Nihil est* de las Decretales (libro I, tit. VI, c. 44), donde Inocencio III, después de prohibir que el elegido entre a administrar el cargo para el que ha sido electo; antes de obtener la confirmación canónica, bajo pena de deposición para el promovido y otras penas para el promotor, concede una dispensa *dispensative* a los Obispos y Abades que reúnan estas condiciones: 1.º, que dependan inmediatamente de la Santa Sede, sin ningún intermediario, por tratarse de iglesias pontificias (*qui ad Romanum pertinent immediate Pontificem*); 2.º, que hayan sido designados, no por presentación, sino por elección, y no por cualquier clase de elección, sino por *elección concorde* del Cabildo correspondiente (*si electi fuerint in concordia*); 3.º, que se trate de Cabildos de carácter pontificio, situados «muy lejos... fuera de Italia» (*valde remoti... ultra Italiam*).

La razón de la dispensa es que la seguridad de acierto que ofrecía la elección concorde de un Cabildo sometido inmediatamente al Romano Pontífice era garantía suficiente para permitir al elegido la administración interina de la Iglesia, cuando el Cabildo estuviese conforme en ello. Por lo tanto no había razón para proceder con severidad y no conceder la dispensa aludida, teniendo en cuenta el largo viaje que había que hacer en aquellos tiempos, en que no había correos, ni telégrafos, ni vapores, ni trenes; pues se trata de un decreto de Inocencio III, que reinó desde 1198 hasta 1216.

Note la Corte Suprema la diferencia entre el caso de fines del siglo XII y el nuestro. Allí no hay presentación de seglares ni intervención de políticos; se trata de una elección canónica de un Cabildo pontificio, y no de cualquier elección de tal Cabildo, sino de elección concorde. No es admisible tal argumento.

Por lo demás, casi un siglo más tarde, el año 1274, en el Concilio Universal Lugdunense II, en presencia de 1.500 Obispos de todo el mundo, volvió a condenar Gregorio X tales administraciones de los electos *ni bajo el nombre de economato o de procuración, ni con cualquier otro color nuevo que se busque, ni en las cosas espirituales ni en las temporales, ni por sí ni por otro, ni en todo ni en parte.* (Libro Sexto de las Decretales, De elect. 5.)

Más tarde, a fines del siglo XIII, Bonifacio VIII fulmina severas penas contra los electos que administran y contra los Cabildos que permiten dicha administración, y prohíbe que nadie obedezca a tales

administradores (*nullique... eis pareant vel intendant*) en el canon *Injunctae*. (Extrav. Comm., libro I, c. 1.)

El Código vigente de la Iglesia conserva severos castigos, tanto para el electo, como para el Cabildo Eclesiástico que lo reciba, en el canon 2.394.

Considere la Corte Suprema los trastornos que sobrevendrían si el señor Presidente ejercitase el derecho *imprescriptible* que ella le señala.

XXI.—La situación de la Iglesia en las Leyes de Indias.

La Corte Suprema recuerda al Gobierno Argentino lo peor que hay en ellas con respecto a la Iglesia, y además le declara que todavía tienen fuerza de ley.

La lástima es que no tengan fuerza de ley las muchísimas cosas favorables para la Iglesia que en ellas están sancionadas, sino únicamente las desfavorables.

Es notable la esplendidez con que dotaron a las Iglesias de América las Leyes de Indias, lo mismo que los derechos, poderes y consideración social que les concedían.

Ya que las Leyes de Indias están vigentes todavía en la Argentina, según el fallo de la Corte Suprema, veamos lo que disponen acerca de la dotación del Clero Argentino.

Para el sostenimiento del Clero, se percibían diversos impuestos, siendo los más importantes los siguientes: a) *El diezmo, o sea el 10 % sobre el valor bruto de los productos (excepto uno que otro, como el azúcar, que pagaba menos)...* b) *la primicia, consistente en el 20 % de los tesoros que se descubriesen.* c) *La cruzada, contribución voluntaria (que las convenciones sociales hacían obligatoria), etc.* (Astolfi y Migone, *Resumen de Historia Argentina*.)

Esto sin contar las propiedades particulares de la Iglesia, ni las fundaciones, ni los estipendios y derechos parroquiales (1).

Ahora bien: calculemos aproximadamente lo que debería abonar

(1) Es digno de leerse todo el largo y minucioso título *De los diezmos* en el libro I de la Recopilación de Indias. Allí se determina la manera cómo se ha de entregar a cada Iglesia la décima parte de los diversos y variados productos agrícolas y ganaderos; qué edad han de tener los animales en el momento de entregar de diez becerros, uno; de diez potros, uno; de diez corderos, uno; etc., etc.; cómo se ha de apreciar la décima parte de los productos de lechería; qué se ha de hacer cuando un rebaño ha pastado unos meses en el territorio de una parroquia y otros meses en el de otra; etc., etc.

a la Iglesia el Estado Argentino, para cumplir las vigentes Leyes de Indias. La Constitución no determina esta cantidad, contentándose con declarar en su artículo 2.º que *el Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano*; pero donde no habla la Constitución sirven de norma las Leyes de Indias.

Considerando únicamente el valor bruto de los productos argentinos, exportados para el extranjero en 1920, resulta que asciende a 1.044 millones de pesos oro. Si agregamos a esto el valor de los productos consumidos dentro de la Nación, y deducimos de la suma un 10 % aproximado en pesos papel, la cifra más modesta que se puede asignar a la Iglesia Argentina de diezmos, será superior a 250 o 300 millones de pesos papel.

Si a esto se agregan los demás ingresos, y los réditos de las propiedades eclesiásticas incautadas por el Gobierno, como la manzana de San Ignacio, la manzana de la Merced, el solar de la Asistencia Pública, los terrenos y Cementerio de la Recoleta, los terrenos y Cementerio de la Chacarita, etc., resulta que, según las Leyes de Indias, la Iglesia regalaría al Estado varios millones, aunque ella percibiese del Estado 500 millones anuales.

Ahora bien: como no llega a percibir ni un millón, se deduce que, por este sólo concepto, el Estado, como Patrono de la Iglesia, deja de abonarle a ésta más de 499 millones anuales, que pasan al erario del Patrono.

Si las Leyes de Indias tienen valor en aquello poco que molesta a la Iglesia, deben tener también valor en lo que favorece a la Iglesia.

El Estado Argentino, al suprimir los diezmos, prometió pagar su equivalente en fondos del Estado.

La *Ley de reforma general en el orden eclesiástico*, dictada en diciembre de 1822, decía así en su artículo 2.º: *Desde el primero de enero de 1823, quedan abolidos los diezmos; y las atenciones a que ellos eran destinados serán cubiertas por los fondos del Estado.»*

La misma disposición adoptó el Gobierno de la Confederación Argentina, en un decreto del 5 de enero de 1854, cuyo artículo 1.º dice así: *Por ahora, y hasta el arreglo general de las rentas de la Confederación, se asigna para el sostén del culto la misma suma que a este objeto sufragaban los diezmos.*

Ya la Confederación hace caso omiso de todos los demás ingresos que asignaban a la Iglesia las Leyes de Indias; pero le conserva el derecho al equivalente del 10 por ciento del valor de los productos argentinos.

Hoy día, el Estado Argentino asigna a la Iglesia menos de un millón, como si el valor bruto de todos los productos argentinos fuera menos de 10 millones de pesos papel.

No creemos que el Patrono de la Iglesia cumpla los compromisos y deberes que tiene con ella; y haría mejor en no mencionar las Leyes de Indias, para que no caigamos en la tentación de comparar aquéllo con ésto.

Y no se diga que valían poco las propiedades de la Iglesia; porque, por ejemplo, con lo que rentaban las posesiones eclesiásticas de la Chacarita, llamadas Temporalidades (como dicen Astolfi y Migone, en el libro citado, pág. 57) se sostenía el Real Convictorio Carolino, en la manzana de San Ignacio, con sus alumnos internos.

Comenzó dicho Colegio con 100 alumnos, dirigidos por un rector, un vicerrector, 12 catedráticos, etc.

¿Cuántos colegios, universidades, escuelas parroquiales, hospitales y asilos benéficos no podría sostenerse hoy día la Iglesia Argentina, si estuviesen en vigor las Leyes de Indias?

¿Qué prosperidad no alcanzaría la Iglesia Argentina, si se cumpliera lo que se prometió en 1822 y en 1854, sobre el monto del presupuesto del Culto, basándolo en el monto del diezmo de las Leyes de Indias?

¿Por qué fatalidad han de servir éstas únicamente para la parte odiosa que logró infiltrar en ellas el regalismo de algunos monarcas, sin tener en cuenta su espíritu general?

XXII.—El verdadero alcance del Memorial Ajustado.

Supone la Corte Suprema que en 1834 se celebró una Junta de juristas, canonistas y teólogos; pero el doctor Legón demuestra en su libro *Doctrina y ejercicio del Patronato Nacional*, obra laureada con un premio especial por la Facultad de Derecho, que no pudo reunirse tal Junta, y que en vista de ello se determinó que cada cual mandase por separado su informe.

Supone la Corte Suprema que las 14 proposiciones tenían algún valor de declaración del Gobierno, según se desprende de la manera cómo se expresa: *La base séptima, adoptada como exacta por la Junta, establecía lo siguiente*: etc.

Ni pudo reunirse la Junta, a pesar de haber sido convocada, ni estableció nada ella, ni había establecido nada antes el Gobierno que redactó las 14 proposiciones.

El Gobierno, en lugar de presentar los puntos de estudio en forma

de preguntas, los presentó en forma de afirmaciones, como era costumbre en las disputas escolásticas; pero no estableció nada acerca de ellas, ni antes ni después de haber recibido los pareceres separados. Nunca las convirtió en decreto del Gobierno, ni en resolución del Gobierno. Viendo que había discrepancia de pareceres, se contentó con archivarlo todo, sin resolver nada.

XXIII.—El vigor del Concilio Tridentino y la existencia del Patronato.

No vamos a discutir ahora la cuestión de si existe o no existe legítimamente el Patronato en la Argentina.

Este punto lo ha tratado con brevedad y claridad el presbítero doctor Zacarías de Vizcarra, en un folleto titulado *El Patronato Nacional* (Lavalle 1662, Buenos Aires). Allí se refutan con meridiana evidencia los ocho argumentos que se han alegado hasta ahora para probar la existencia del Patronato Argentino.

Nosotros nos limitaremos a tomar nota de la siguiente declaración de la Corte Suprema: *las disposiciones del Concilio Tridentino son leyes con fuerza obligatoria dentro del país.*

De aquí deducimos que, aunque el Estado Argentino hubiera tenido legítimo Patronato en algún tiempo, lo ha perdido desde el momento que usurpó los bienes eclesiásticos, según lo dispone el capítulo 11 de la sesión 22 del Concilio Tridentino, donde se condena tal usurpación con excomunión reservada al Romano Pontífice y con la pérdida del Patronato, cualquiera que sea la dignidad del Patrono, aunque brille con la dignidad Imperial o Real (*quacumque is dignitate, etiam Imperiali aut Regali, praeferat*). Y no sólo incurre en estas penas el mismo que usurpa los bienes eclesiásticos, sino también los que impiden que sean percibidos por aquellos a quienes de derecho pertenecen.

Por consiguiente, según las leyes vigentes en la Argentina, el Gobierno Argentino ha perdido el derecho de Patronato, si alguna vez lo tuvo.

Notemos al mismo tiempo que es injusto observar el Concilio Tridentino solamente en aquello de que se puede asir uno para oponerse al Papa (aunque sin razón, como lo hemos demostrado antes), y no hacerle caso en las innumerables disposiciones favorables a la Iglesia que están sancionadas en él: como por ejemplo el matrimonio religioso, largamente reglamentado, la enseñanza religiosa, prescrita para las escuelas, la inmunidad eclesiástica, etc, etc.

Observemos también que son muy exageradas las frases que de-

dica a la adopción del Concilio Tridentino, como ley del Estado, por los Reyes de España. *Este último* (dice el fallo) *no se observó en España, hasta que Felipe II, por cédula de 12 de junio de 1564, mandó, salvando los derechos de Patronato* (que, entre paréntesis, están salvados expresamente por el mismo Concilio en el cap. IX de la sesión 25, donde dice: *exceptis aliis quae ad Imperatorem et Reges... pertinent*) *que se guardara y ejecutara cuanto en él se ordena, así en la metrópoli como en las Indias.*

Esto parece indicar que Felipe II tardó bastante en redactar y publicar la ley que convertía los decretos disciplinares del Concilio Tridentino en ley de España y de las Indias. Sin embargo, sería ese un error manifiesto. España fué la primera nación del mundo que convirtió en ley de Estado el Concilio Tridentino, precisamente para facilitar la implantación de las radicales reformas nuevas que introducía en el régimen de la Iglesia dicho Concilio. Felipe II fué en esto el brazo derecho del Papa. El Concilio Tridentino comenzó a obligar, según la bula *Sicut ad Sacrorum* de Pío IV, el 1.º de mayo de 1564; y a los 43 días justos, el 12 de junio del mismo año, era ya ley del reino. ¿Hubiera sido tan diligente y expedita la Corte Suprema, que todavía nos tiene estancados en las Leyes de Indias?

Pero no se ha de interpretar erróneamente la magnífica actitud adoptada por Felipe II. No significaba esa actitud que los decretos del Concilio necesitasen de la aprobación real para obligar en España. Eso sería convertir al Patrono de la Iglesia en Dueño y Tirano de la Iglesia, en lugar de ser, como debe serlo, el Defensor y Protector de la Iglesia.

Más le valiera a la Iglesia no tener ningún Patrono, que tenerlo tan imperioso y dominante, que prácticamente venga a ser un enemigo de la Iglesia.

Lo que hacía Felipe II en aquella ocasión era oír, como Príncipe católico, el llamamiento que dirigía el mismo Concilio a los Príncipes, al fin de la sesión 25, diciéndoles: «*Resta ahora exhortar en el Señor a todos los Príncipes a que no permitan que los herejes depraven o violen lo que ha sido decretado por él, sino que tanto éstos como todos los demás lo reciban devotamente y lo observen fielmente*».

Era en efecto muy necesario el apoyo de los príncipes católicos en aquellos momentos en que el fraile apóstata Martín Lutero capitaneaba la rebelión contra la Iglesia y el Concilio, arrastrando tras sí monasterios, obispados, provincias y reinos enteros.

Al año siguiente de tener ya fuerza de ley civil en los tribunales de

España las radicales reformas decretadas por el Concilio Tridentino, tuvo que publicar el Papa Pío IV su bula *In Principis Apostolorum*, urgiendo con gravísimas palabras a los Cabildos Eclesiásticos, a las Ordenes Militares, a las Colegiatas y a otros organismos eclesiásticos, a aceptar sin demora las reformas de dicho Concilio. El espíritu de rebeldía protestante estaba infiltrado en vasta escala por toda la cristiandad, siendo España un verdadero oasis, gracias a que tenía en sus reyes católicos verdaderos Patronos de la Iglesia, que no entendían el oficio de Patrono en el sentido tiránico e indigno que le dan algunos entre nosotros, sino en su sentido legítimo y originario de Defensor de la Iglesia y de los derechos eclesiásticos.

XXIV.—La interpretación del inciso 19 del artículo 67 de la Constitución nacional, según la Suprema Corte.

Dice la Corte Suprema que la Constitución se debe completar con el Concilio Tridentino (interpretado a su modo *mientras no se sancione la ley reglamentaria del Patronato Nacional*).

Estas palabras incluyen una errónea interpretación del inciso 19 del art. 67 de la Constitución, que dice así: *Corresponde al Congreso... aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones, y los Concordatos con la Silla Apostólica; y arreglar el ejercicio del Patronato en toda la Nación*.

Supone la Corte Suprema que para *arreglar* el Patronato Nacional no hace falta otra cosa que una ley reglamentaria del Congreso. Y eso es falso por varias razones.

En primer lugar, la Constitución no habla de *reglamentar* el ejercicio del Patronato, sino de *arreglarlo*, que es cosa distinta. Dentro del mismo art. 67, se distinguen con notable exactitud ambas palabras. Nótese que habla de *establecer y reglamentar un Banco Nacional* (inciso 5.º), porque primero es el establecimiento y después la reglamentación de lo establecido; *reglamentar la libre navegación de los ríos* (inciso 9.º), que ya está establecida; *reglamentar* el ejercicio de los derechos de que gozan los habitantes de la Nación (arts. 14 y 28).

En cambio, usa la palabra *arreglar*, cuando se trata de cosas que no están establecidas, sino *desarregladas*. Así habla de *arreglar el pago de la deuda interior y exterior* (inciso 6.º); *arreglar y establecer las postas y correos generales* (inciso 13), indicando que se puede *arreglar* una cosa que no está establecida, aunque no se puede *reglamentar* lo que todavía no está establecido; *arreglar definitivamente*

los límites del territorio de la Nación (inciso 14), por estar desarreglados dichos límites; y finalmente *arreglar el ejercicio del Patronato* (inciso 19).

Por consiguiente, para el arreglo del Patronato no basta una ley reglamentaria; porque no se trata de *reglamentar*, sino de *arreglar*.

Adviértase, en segundo lugar, que todo el inciso 19 habla de relaciones exteriores (tratados con otras naciones, concordatos con Roma); y sería extraño que mezclase lo meramente interno con las relaciones exteriores. Por consiguiente, ya esto solo indica que se trata de un arreglo en cierto modo relacionado con el exterior.

En efecto, el mismo sentido común nos dice que el ejercicio de una potestad espiritual, como es el Patronato de la Iglesia y la ingerencia en la designación de los jefes eclesiásticos, no puede hacerse sin intervención de la cabeza de la Iglesia, a cuya soberanía pertenece el objeto que se arregla.

Pero, como algunas Provincias Argentinas habían entrado en tratos con la Santa Sede por sí mismas en la época de la disgregación nacional, y, por ejemplo, Mendoza, después de haber gestionado por sí misma el nombramiento del primer Obispo de Cuyo, había conseguido del Papa la concesión de una especie de Patronato provincial sobre dicha diócesis; después, al constituir la unidad nacional, fué voluntad de los constituyentes que todas las relaciones exteriores estuviesen en manos del Poder Ejecutivo Nacional, con intervención del Congreso Federal, y que por consiguiente el Patronato, como cuestión relacionada con asuntos exteriores, fuese arreglado en toda la Nación por el Gobierno Federal, y no, como antes, por los Gobiernos Provinciales.

Por consiguiente, el arreglo del Patronato es una cuestión de carácter internacional, como todo lo dicho en el inciso 19; y la interpretación lógica de la Constitución es que el Patronato está *desarreglado*, no está todavía suficientemente *establecido*, y que este arreglo y establecimiento se ha de hacer por medio de un Concordato con la Silla Apostólica, que luego ha de ser aprobado por el Congreso Federal.

Por eso decía en 1881 el señor Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, en su memoria presentada al Congreso: *Todos estos asuntos... como los que se refieren al alto Patronato del Gobierno, deben ser claramente fijados y definidos por Concordatos con la Santa Sede, para sacarlos del estado de controversia, de abandono, de desorden, de incertidumbre en que se encuentran*». (Vizcarra, El Patronato Nacional, pág. 12).

XXV.—La resolución de la Suprema Corte y la posibilidad de un Concordato.

La interpretación constitucional consagrada por la Suprema Corte ha hecho más difícil que nunca la celebración de un Concordato con la Santa Sede como lo dispone la misma Constitución Nacional.

Muchas fueron siempre las dificultades con que se ha tropezado para llevar a cabo este propósito de los constituyentes.

El regalismo de la Constitución, agravado con el humillante *exequatur* que atenta contra la soberanía espiritual del Papa, y con las leyes anticristianas que están vigentes, como la enseñanza laica, condenada por la Iglesia para los católicos, el desconocimiento del matrimonio religioso y de su valor legal etc., etc., eran, desde hace mucho tiempo, grande obstáculo.

Además, el método sancionado en la Constitución para la formación de la terna por un cuerpo colegiado de políticos, como lo son los Senadores, es inadmisibile: porque cada provisión de vacantes episcopales se convierte en un negocio político, se presta a influencias de caudillos y caciques, convierte en discusiones del arroyo los méritos o deméritos de los candidatos para Obispos, incita las ambiciones personales de los clérigos poco dignos, para ganar la amistad de los políticos que pueden favorecerlos, introduce en la Iglesia aires profanos que pueden convertirse en semillero de indisciplina.

Ahora bien: como la Argentina no está dispuesta a cambiar nada en sus leyes y prácticas, y lo único que quiere, por medio del Concordato, es ganar más derechos, sin ceder ninguno, es muy difícil que pueda ajustarse un Concordato, que ha de ser un tratado hecho, por lo menos, sobre la base de la igualdad de las partes contratantes.

Pero, si siempre ha sido difícil un Concordato con la Santa Sede, ahora la Corte Suprema, con las doctrinas anticatólicas y los precedentes funestos que ha sentado, lo ha hecho casi imposible.

Es verdad que la Corte Suprema reconoce a la Santa Sede el derecho de rechazar los candidatos propuestos por el Senado y el Poder Ejecutivo (principio de sentido común que se había tergiversado con frecuencia, durante las incidencias a que dió lugar la exclusión de un candidato); pero aún ese reconocimiento lo hace con una cláusula de sentido muy sospechoso, que se presta a falsas interpretaciones.

Dice la Corte Suprema: *El Estado no podría desconocer el legítimo derecho de la Santa Sede para denegar, por fundadas razones,*

aquello que se encuentra en sus facultades otorgar, esto es, la institución canónica, requiriendo en tal caso una nueva presentación.

La cláusula *por fundadas razones* puede entenderse de dos maneras: 1.º la Santa Sede ha de *tener* razones fundadas, para rechazar una presentación legítima, hecha por un Patrono legítimo; 2.º la Santa Sede ha de *alegar* ante el Patrono las razones en que se funda para rechazar a un candidato legítimamente presentado.

En el primer sentido la cláusula es razonable y exacta, suponiendo que el Estado Argentino posea legítimo Patronato; aunque es evidente que no lo posee, por las razones que expone brevemente el citado folleto del señor Vizcarra.

En el segundo sentido es completamente inaceptable, por las razones que se exponen en el capítulo XV del mencionado opúsculo. Dadas las condiciones que se requieren para ser Obispo, y supuesta la investigación que se hace sobre la vida privada del candidato, no puede el Papa manifestar los defectos ocultos que se hayan descubierto, porque no debe infamar a nadie irrazonablemente; y, si no se ha descubierto ningún defecto infamante, tampoco es conveniente establecer la norma de que se manifestarán los defectos, cuando no sean infamantes. Porque de ahí se deduciría que había defectos infamantes siempre que el Papa no los manifestase; y por consiguiente quedarían indirectamente infamados todos aquellos cuyos defectos no se manifestasen.

Por esta razón establece sapientísimamente el Código de la Iglesia que, aun tratándose de presentaciones ante el simple Ordinario de cada diócesis, *el Ordinario no está obligado a manifestar al Patrono las razones por las cuales no puede admitir a la persona presentada* (canon 1464).

Tratándose del Papa, las razones son más poderosas; porque, si al Patrono no le parecen suficientemente graves los impedimentos que se oponen a la promoción de su candidato (siendo como es el Gobierno completamente incompetente para juzgar las cualidades eclesiásticas necesarias para un Obispo) se entablará una disputa estrafalaria entre el Papa y el Gobierno sobre los defectos del candidato para Obispo, sin posibilidad de apelar a ningún tribunal superior, para dirimir la extraña controversia. Entre tanto el pobre candidato se vería convertido en objeto de las hablillas del vulgo y de las indiscreciones de la prensa, sin provecho para nadie.

En vista de esto suponemos que la Corte Suprema hallará razonable la disposición del Código de la Iglesia, y cuando llegue el caso, interpretará en este sentido su cláusula ambigua.

XXVI.—La resolución de la Suprema Corte y el espíritu de la Constitución.

El espíritu de la Constitución, en materias religiosas, no es hostil a la Iglesia Católica, como parece desprenderse del fallo de la Suprema Corte.

Hay en ella disposiciones regalistas censurables, fruto de los errores que varios de los constituyentes habían bebido en los libros escritos por los canonistas palaciegos de los monarcas absolutos de Francia y España; pero las tendencias de nuestra *Carta Magna*, bien interpretadas, bastarían para neutralizar un poco sus malas consecuencias.

Una Constitución hostil a la Iglesia Católica no mandaría en su 2.º artículo como una de las cosas más fundamentales de la organización nacional, sostener el culto católico apostólico romano; no exigiría que el Presidente y Vicepresidente de la Nación tuvieran que ser necesariamente católicos apostólicos romanos, como lo exige el art. 76; no impondría el deber de convertir a los indios a la religión católica, como de hecho se lo impone al Gobierno Federal nuestra Constitución.

El espíritu de la Constitución es que se trate a la Iglesia Católica mucho mejor que a todas las demás religiones; que no se contente el Gobierno con ofrecerle la misma libertad que concede a todas las demás religiones, sino que, además, de la libertad, le dispense su protección especial; que el Gobierno Argentino sea verdadero Patrono, es decir, Defensor, de la Iglesia Católica, y que no sea Patrono de ninguna otra religión.

Sin embargo, la Corte Suprema entiende el Patronato, no como una defensa, no como una protección especial, sino como una servidumbre impuesta a la Iglesia Católica, en oposición a la libertad otorgada a todas las demás religiones.

Ha llevado tan lejos el espíritu de patrocinio, que al que debía patrocinar lo ha convertido en paria.

XXVII.—La resolución de la Suprema Corte y el sentido literal y obvio de la Constitución.

Dice la Suprema Corte que la Constitución Argentina ha tomado de las Leyes de Indias sus disposiciones acerca del Patronato.

Esa es precisamente la mejor prueba de que la Constitución rechaza las añadiduras con que la Suprema Corte ha agravado la situación de la Iglesia Católica.

Porque, una de dos: o las Leyes de Indias tienen imperio en todo

lo que se relaciona con materias religiosas, o solamente lo tienen las disposiciones que la Constitución consagra, tomadas también de las Leyes de Indias.

En el primer caso, no sólo habría que tener en cuenta las disposiciones desventajosas para la Iglesia, sino también aquellas que le son favorables; en el segundo, habría que atenerse exclusivamente a las consagradas por la Constitución, sin complementos extraños y agravantes.

Esta es la única interpretación que corresponde.

Cuando un legislador adopta, en un nuevo Código, algunos preceptos de legislaciones anteriores, y deliberadamente deja de adoptar otros preceptos que están unidos a aquéllos en el mismo texto legal, es señal inequívoca de que quiere que los adoptados continúen vigentes, y que los no adoptados queden derogados.

Cuando ellos han seleccionado lo que querían que subsistiese de las Leyes de Indias, han indicado claramente que no querían que subsistiese lo demás: porque nada les costaba añadir alguna frase que comprendiese, por lo menos en general, las demás disposiciones.

Es pues contrario al sentido obvio de las cláusulas constitucionales completarlas con aquellos preceptos que a sabiendas han pasado por alto los constituyentes, sobre todo teniendo en cuenta que han pretendido hacer de la República Argentina la Nación más libre de la tierra, y considerando que las trabas desenterradas por la Corte Suprema la convierten en Nación opresora de los católicos.

XXVIII.—El acuerdo de la Suprema Corte y las nociones doctrinales sobre la unión de la Iglesia y el Estado.

La doctrina sustentada por la Corte Suprema quiebra de raíz los principios en que se funda la unión de los dos poderes.

Consideramos de una importancia capital aclarar breve y sintéticamente estos conceptos.

A)—Para entender con claridad este punto doctrinal, partamos de esta base: *La Iglesia y la Sociedad civil son dos hermanas.*

Tienen el mismo autor: porque Dios fundó la Iglesia, y Dios creó la necesidad natural de que los hombres vivan en sociedad civil, haciendo de tal manera al hombre que, a diferencia de las bestias, no puede alcanzar su pleno desarrollo más que en el seno de la sociedad civil.

Tienen súbditos comunes: porque los cristianos que están obligados a someterse a las leyes de la Iglesia, son al mismo tiempo ciudadanos que están obligados a cumplir las leyes del Estado.

Tienen medios inseparables, aunque los fines sean distintos: porque aunque el fin de la Iglesia sea procurar el bien espiritual de los hombres, no puede prescindir, en su acción, de los medios temporales; y aunque el fin del Estado sea procurar el bien temporal de los ciudadanos, no puede conseguir tal bien si prescinde de los medios morales y religiosos, poniendo a los ciudadanos en conflictos dolorosos para su conciencia, cuando las leyes del Estado contradigan a las leyes de la Iglesia.

De aquí se deduce que estas dos hermanas tienen que ponerse de acuerdo, por tener intereses comunes, súbditos comunes y común autor.

Las *esferas de acción* de estas dos hermanas son tres: 1) la esfera de las cosas *enteramente espirituales*, donde tiene exclusiva competencia la Iglesia; 2) la esfera de las cosas *enteramente temporales*, donde tiene exclusiva competencia el Estado; 3) la esfera de las cosas *mixtas*, en que se mezclan los intereses de ambas hermanas.

En la primera esfera, corresponde plena libertad a la Iglesia.

En la segunda esfera, corresponde plena libertad a la sociedad civil.

En la tercera esfera, tienen que ponerse de acuerdo las dos hermanas; porque Dios, que es el autor de la mezcla de intereses, no pudo querer que ambas se atropellasen mutuamente, sino que obrasen en paz y concordia.

Si dos trenes contrarios tienen que servirse de la misma línea, lo razonable es que se pongan de acuerdo los maquinistas de ambos, para concertar el horario y no producir una catástrofe con un choque insensato.

De aquí se deduce la conclusión de que, en circunstancias normales, tiene que haber, entre la Iglesia y el Estado, la unión suficiente para lograr el mutuo acuerdo en los intereses mixtos.

Por esto fué condenada por Pío IX en el Syllabus (proposición 55) la tesis general que dice: *La Iglesia se ha de separar del Estado, y el Estado de la Iglesia*. Lo que aquí se condena es la tesis de la separación, tomada como principio general, aplicable en todas las circunstancias. Es como si se condenara esta otra proposición: *Dos hermanas que tienen intereses comunes no se han de poner nunca de acuerdo acerca de ellos*. Basta el sentido común para ver la razón de su condenación, en tesis general, sin excluir las excepciones que veremos después.

B).—La segunda base es esta: *La Iglesia y la sociedad civil son dos hermanas soberanas, aunque no enteramente iguales*.

Jesucristo, después de haber probado evidentemente con sus prodigios, su santidad y su resurrección de entre los muertos, que era Legado Divino y Dios verdadero, estableció su Iglesia, independiente del Estado, y con soberanía espiritual plena y perfecta, proclamándose a sí mismo rey, delante del magistrado Poncio Pilato, y entregando las llaves de su reino a San Pedro y a sus sucesores, con omnimoda autoridad para *atar y desatar*, es decir, para obligar y desobligar. Hizo de su Iglesia un reino independiente, al que llamó *el reino de los cielos*, porque su fin era llevar a la humanidad a los cielos. La Iglesia es tan soberana, por voluntad de Jesucristo, que él mismo le anunció que sería perseguida por reyes y presidentes; pero también le aconsejó que no se asustase por eso, y que no temiese a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. (Evangelio de San Mateo, X, 16, 17, 28).

También la sociedad civil es perfectamente soberana en su propia esfera, como todos lo reconocen.

Pero estas dos hermanas no son iguales: la sociedad civil es mayor que la Iglesia en fuerza material y riqueza, pero menor en dignidad y extensión; en cambio, la Iglesia es menor en fuerza material y riqueza, pero mayor en dignidad y extensión.

La supremacía de dignidad, entre dos sociedades perfectas, se mide por la supremacía del fin a que tienden. El fin a que tiende la Iglesia es el bien espiritual y eterno; el fin a que tiende el Estado es el bien material y temporal de la felicidad terrestre. Para todo creyente es mucho más alto y noble el fin de la Iglesia; por eso es también mayor su dignidad, aunque es menor su fuerza y riqueza.

La extensión del Estado se limita a las fronteras de una nación, más o menos anchas y fluctuantes en la sucesión de los siglos. La extensión de la Iglesia no reconoce fronteras, porque es católica (es decir, universal) en su jurisdicción internacional, y perpetua en la sucesión de los siglos.

Por eso el ciudadano creyente, cuando ve un conflicto de jurisdicciones entre estas dos sociedades, tiene que inclinarse a favor de la hermana mayor, aunque sea más débil, desobedeciendo a la hermana menor, aunque la vea cargada de oro y empuñando brillante espada.

C).—La tercera base podría enunciarse así: *La unión de la Iglesia y de la sociedad civil ha de ser unión de amistad y mutuo apoyo, y no unión económica y burocrática.*

La unión entre ambas tiene por fin ponerse de acuerdo para prevenir los conflictos de jurisdicciones y para prestarse mutuo apoyo.

Para ésto no es necesaria la unión económica ni la burocrática. Se consigue mejor y más fácilmente sin la unión económica y burocrática; porque estas dos clases de unión se convierten en subordinación del que cobra al que paga, del que administra al que es administrado.

La unión económica y burocrática es esencialmente un principio de separación. Tanto estarán más unidas la Iglesia y la sociedad civil, cuanto más desunidas estén en el terreno económico y burocrático. Es lo que pasa a los buenos amigos: tienen la amistad tanto más segura cuanto menos se funde en intereses materiales. El interés mata la amistad con demasiada frecuencia.

Entre nosotros, la Iglesia está sometida a la burocracia económica del Estado y a las discusiones y diatribas de las Cámaras; porque el Estado, que es más fuerte que la Iglesia, le privó a ésta de la administración de sus bienes, rentas y propiedades, sometiéndola, contra su voluntad, a la humillación de la burocracia y a los insultos periódicos de los legisladores anticatólicos.

La Iglesia lamenta esta unión, precisamente por amor a la unión verdadera y legítima.

D).—La cuarta base es esta: *Cuando una hermana oprime a la otra hermana, la oprimida puede desear separarse de la opresora, si no se ve posibilidad de arreglo satisfactorio.*

Sería insensato obligar a la hermana más débil a no apartarse de la hermana más fuerte, cuando ésta la oprima y esclavice. La hermana que oprime, por el mismo acto de la opresión, ya rompió la unión de amistad. Ya no existe verdadera unión. La hermana débil está *unida* a la fuerte, pero no está propiamente *unida* a ella con unión fraternal.

Por eso dice León XIII, en su encíclica *Inmortale Dei*: *Querer que la Iglesia esté subordinada a la potestad civil hasta en el desempeño de sus deberes, es una gran injuria y una gran insolencia.*

En este caso no se trata de circunstancias normales, en las cuales no es lícito desear la separación. En este caso no se hace más que proclamar la independendencia, por haberse convertido la unión de amistad en dependencia servil. No es más que la resistencia contra la esclavitud.

La Iglesia, aun después de una obligada separación, estará dispuesta a reanudar la unión, siempre que se le ofrezcan suficientes garantías. La Iglesia no olvidará nunca la tesis, aunque el mal trato de su hermana la ponga en la necesidad de aceptar provisoriamente la hipótesis.

XXIX.—En la Argentina no existe unión entre la Iglesia y el Estado.

Según la doctrina que se acaba de exponer y los principios proclamados por la Suprema Corte, la Iglesia Argentina está *unida* al Estado, pero no está *unida* a él con la unión de amistad que pide su dignidad.

La representación diplomática ante el Papa no significa nada; porque también la tienen el rey protestante de Inglaterra y otros jefes de naciones heterodoxas, donde la Iglesia no está unida al Estado, sino meramente aliada con él en ciertos puntos determinados.

El Estado Argentino no está unido a la Iglesia, porque prescinde completamente de sus derechos más sagrados y viola sus intereses más fundamentales.

La Iglesia condena la enseñanza laica para sus hijos; y el Estado impone la enseñanza laica a los hijos de la Iglesia, que pierde poco a poco la fe, en las escuelas monopolizadas por el Estado prácticamente ateo. Nada vale para esto la vigencia del Concilio Tridentino, que se explota únicamente (y aun entonces mal) para herir a la Iglesia.

La Iglesia proclama sus derechos inalienables sobre el contrato matrimonial, elevado por Jesucristo a la dignidad de Sacramento, inseparable del mismo contrato; y el Estado Argentino desconoce completamente la existencia del matrimonio religioso, aun para los católicos, pisoteando los dogmas de la Iglesia, y aun persiguiendo a los sacerdotes que no se sujeten a sus preceptos en la administración de este Sacramento, a pesar de no reconocerle ninguna validez.

Tanto la educación de los hijos, como la constitución de la familia, las dos células madres de la sociedad cristiana, están colocadas sobre una base completamente adversa a la Iglesia, y dañosa para la fe.

La Iglesia rechaza como un insulto a su soberanía el *exequatur* a los decretos de sus Concilios y de sus Papas, esa aduana humillante que se atreve a sujetar a su examen hasta los dogmas de la fe: pero el Estado Argentino lo mantiene cada vez con mayor vigor, encargándose su Corte Suprema de interpretar su dominio en una forma extensiva, que lucha con el mismo sentido literal de la Constitución regalista. Ni siquiera permite a los clérigos cumplir las leyes vigentes de la Iglesia.

La Iglesia condena severamente la usurpación de sus bienes y de sus rentas, que le permiten cierta independencia frente al poder absorbente del Estado; pero el Estado, sin dejar de llamarse Patrono y Defensor de la Iglesia, la priva de sus bienes y la somete a la exi-

gua y precaria votación anual de los presupuestos, hecha por diputados en gran parte indiferentes o incrédulos, y hasta ateos.

Y la Iglesia no tiene medios para librarse de la opresora tutela del Estado; no ha caído voluntariamente en ella; no se le deja salir voluntariamente de ella. Es menos que una sirvienta; porque a una sirvienta se le permite pactar la extensión de sus servicios, el monto del salario y el tiempo de rescindir el contrato. La Iglesia no goza de las facultades de una sirvienta.

Ni es la amiga del Estado, ni es la sirvienta del Estado. Es la esclava del Estado, que no reconoce sus derechos fundamentales, ni salvaguarda sus intereses principales; y sin embargo la somete a una sujeción de que se ven libres los judíos, protestantes y masones.

Todo porque se vota a su favor un exiguo presupuesto, que le es debido a título de restitución por los bienes que le han sido usurpados.

Es como si yo despojase de todos sus bienes a una pobre viuda, y le dijese después: *Como ya te quité tus bienes, tienes que ser mi esclava por todos los días de tu vida. ¿No ves que te doy un mendrugo diario, para que no te mueras de hambre? Si no me hubiera apoderado yo de tus bienes, serías libre y rica; pero, una vez que te los he quitado, lo que pide la justicia es que seas mi esclava.*

¿A quién le parece razonable este discurso? Sin embargo esa es la conducta del Estado Argentino con la Iglesia. Como la despojó de sus bienes, la incluyó en el presupuesto; y como la incluyó en el presupuesto, la priva de su libertad.

No tiene la Iglesia Argentina la libertad de que gozan los judíos, los protestantes y los masones. Y es porque la Argentina no despojó de nada a los judíos, protestantes y masones.

El Gobierno deja plena libertad al Obispo protestante de Buenos Aires y a todos los pastores y pastoras de todas las sectas. No interviene en sus nombramientos, hechos desde el extranjero. No exige el pase a sus leyes y a los decretos de sus superiores extranjeros. No los ha despojado de sus bienes. Los protestantes son libres. Los católicos son esclavos.

Los grandes rabinos del extranjero y los pequeños rabinos de todos los barrios de la ciudad gozan de plena libertad religiosa. Nadie interviene en los nombramientos de sus autoridades, nadie pide el pase para sus decretos, nadie impide el ejercicio de los cargos que hayan recibido. Nadie los ha despojado tampoco de sus bienes. Los judíos son libres. Los católicos son esclavos.

Sin embargo la Constitución promete en su Preámbulo *los benefi-*

cios de la libertad... para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.

Garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho *de profesar libremente su culto* (Art. 14).

Declara que *todos sus habitantes son iguales ante la ley* (Art. 16).

Añade solemnemente: *En la Nación Argentina no hay esclavos* (Art. 15).

Y entretanto los católicos no tenemos la libertad de ejercer nuestro culto como la tienen los que pertenecen a cualquier otra religión...

CONCLUSION

XXX.—La resolución de la Suprema Corte y la libertad de la Iglesia.

Del análisis que dejamos hecho se desprende esta verdad dolorosa: la acordada de la Corte Suprema negando el pase constitucional al nombramiento del Administrador Apostólico es un eslabón más de la cadena regalista que aprisiona en la Argentina a la Iglesia de Dios.

Ante esa situación se plantea a los católicos el deber ineludible de la lucha por la libertad. No es el caso de imaginar conflictos con el Estado ni de promover cuestiones enojosas. Queremos ante todo la unión y el acuerdo pero sin desmedro de la libertad de la Iglesia. La libertad no nos asusta. Los católicos, todos los días, al fin de la Misa, rogamos *por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia* (*pro libertate et exaltatione Sancta Matris Ecclesiae*).

La Iglesia nació y creció tan separada del Estado, que el Estado crucificó a su Fundador, y persiguió con pena de muerte, durante los tres primeros siglos, a todos los que formasen parte de ella.

La Iglesia triunfa, brilla y florece en los Estados Unidos del Brasil, en el Uruguay, y en otras muchas naciones, sin echar de menos el biberón del Estado, y con mucha más lozanía que cuando, en algunas de esas naciones gozaba del mentido Patronato de Estados prácticamente ateos.

La Iglesia ganará en dignidad y fecundidad el día que deje de aparecer a los ojos del pueblo como una oficina burocrática de funcionarios a sueldo del Estado, aunque el Estado no abona más que a un 5 por ciento del Clero una ínfima parte de lo que debe pagarle, a título de restitución, por los bienes eclesiásticos que detenta, lo cual no impide que se presente todos los años a la Iglesia, en el Parlamento y en las tribunas populares, como el gran pulpo que devora la sangre del pueblo y explota millones y millones del presupuesto.

Las cosas han llegado a tal extremo que las nociones más elementales están tergiversadas. Hasta el Patronato, que es una verdadera función de protección a la Iglesia, se ha convertido en un arma de ataque contra ella.

Esto no debe ser así. Los católicos no podemos tolerar esta deformación, que sólo trae abusos de fuerza, y tenemos el derecho, como ciudadanos, de reclamar su derogación.

O la libertad, o el concordato; nunca la servidumbre.

APENDICE I.—Carta de nombramiento del Ilmo. señor Administrador Apostólico de Buenos Aires.

Nos, Juan Beda Cardinale, por la Gracia de Dios y de la Sede Apostólica Arzobispo de Quersona, Nuncio Apostólico

Obedeciendo mandatos apostólicos que nos han sido comunicados hoy por telégrafo, y dándoles exacto cumplimiento, por las presentes letras, en nombre y con la autoridad del Sumo Pontífice, nombramos al Ilustrísimo y Reverendísimo señor don Juan Agustín Boneo, dignísimo Obispo de la diócesis de Santa Fe de esta República, decano del Episcopado Argentino, ilustre por el celo ardentísimo de las almas, fina prudencia en el gobierno, eximia integridad de costumbres y doctrina, y peculiar devoción hacia la Sede Apostólica, Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y lo investimos además de la plenitud de facultades y todos los derechos propios del cargo: autorizándolo al propio tiempo para nombrarse un Vicario General que resida en Buenos Aires, debiendo observarse todas las prescripciones del Código de Derecho Canónico, relativas a los Administradores Apostólicos nombrados a beneplácito de la Santa Sede y constituídos con plenitud de potestad en una diócesis *sede plena* es decir, con respecto al caso presente, perdurando con arreglo a los sagrados cánones en su cargo de Vicario Capitular el Reverendísimo señor don Bartolomé Picada, que no sólo ha merecido bien de la Arquidiócesis, sino que, habiendo pedido instantemente autorización para renunciar a su grave cargo a causa del delicado estado de su salud, solamente en virtud de su plena obediencia al Sumo Pontífice consintió en retenerlo, y con devota sumisión acató esta sabia providencia de la Santa Sede; sin que a esto pueda obstar nada en contrario.

Dado en Buenos Aires, en el Palacio de la Nunciatura Apostólica, el día 27 de noviembre de 1924.

M. Silvani, Secretario de la Nunciatura Apostólica.

APENDICE II.—Carta del Excmo. señor Nuncio al Ilmo. señor Obispo de Santa Fe, remitida juntamente con el documento precedente.

Nunciatura Apostólica de Buenos Aires

2 diciembre 1924.

Ilmo. y Rvmo. señor Monseñor Juan Agustín Boneo, Obispo de Santa Fe.

Tengo el honor de remitirle adjunto el decreto con que, por especial encargo de la Santa Sede, he nombrado a V. S. Ilma. y Revma. Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Como aparece por el mismo documento, la Santa Sede se ha visto en la necesidad de recurrir a esta providencia a causa de la grave enfermedad de este Vicario Capitular, Revmo. Mons. doctor Bartolomé Piceda. El, desde el pasado mes de septiembre, ha expresado repetidas veces el deseo de dejar su difícilísimo oficio; pero la Santa Sede, antes que aceptar tal propuesta, ha tenido a bien nombrar a V. S. Administrador Apostólico *sede plena*, es decir, perdurando en su cargo de Vicario Capitular el mencionado Mons. Piceda: con esto tendrá con qué vivir y nada se cambia en el gobierno espiritual de la Arquidiócesis.

Al autorizar a V. S. para nombrar un Vicario o Representante que resida en Buenos Aires, el Santo Padre entiende que el nombramiento recaiga en el Vicario Capitular, porque él, en momentos difícilísimos, ha merecido bien de la Iglesia en su patria; y sería sumamente desagradable que una providencia pontificia, adoptada para ayudar al Vicario Capitular, hubiera de ser interpretada como una desautorización de éste: cosa que podría tener lugar si, en vez de Monseñor Piceda fuese nombrado otro sacerdote, como representante de V. S. aquí en Buenos Aires.

La Santa Sede ha concedido a V. S. todas las facultades que son necesarias para el gobierno de la Arquidiócesis. Con esto se provee también a los graves y frecuentes inconvenientes que se han originado por la falta de facultades del Vicario Capitular. También bajo este aspecto la situación de Vicario Capitular, y por consiguiente, la de la Arquidiócesis, resulta notablemente mejorada; porque él, como representante del Administrador Apostólico, gozará de mucho mayor poder que como simple Vicario Capitular.

Sin embargo es deseo vivísimo de la Santa Sede que se procure economizar las fuerzas de Mons. Piceda cuanto sea posible, mientras dure su enfermedad, distribuyendo adecuadamente el trabajo entre el

personal de la Curia; cosa esta que, si antes no era posible, por razón de la condición jurídica del Vicario Capitular, es ahora bastante fácil con las mayores facultades dadas a V. S.

Es superfluo añadir que el cargo de Administrador Apostólico cesará con la provisión definitiva de la sede arzobispal de Buenos Aires.

Augurándole todo bien, me repito, etc.

APENDICE III.—Declaración del Cabildo Metropolitano, aceptando incondicionalmente al Administrador Apostólico.

«Buenos Aires, diciembre 7 de 1924.—El Cabildo Metropolitano, reunido hoy en acuerdo extraordinario, en vista de haberse publicado «que las disposiciones tomadas por la Santa Sede menoscaban los fueros y derechos de dicho cuerpo», aunque sólo en forma oficiosa tiene conocimiento de la designación de Monseñor Juan Agustín Boneo para el cargo de Administrador Apostólico de esta Arquidiócesis, ha creído oportuno formular las declaraciones siguientes:

1.º Que esta designación, emanada de la Santa Sede, la acata con veneración, como todas las disposiciones que, en pleno uso de sus derechos de Jefe Supremo de la Iglesia, haya tomado o pudiera tomar en adelante el Sumo Pontífice, respecto a la Administración y Gobierno de nuestra Arquidiócesis.

2.º Que está persuadido que, siendo el Clero de esta Arquidiócesis de doctrina íntegra y completa adhesión a la Santa Iglesia Católica, no hay ni puede haber un solo sacerdote que se aparte de la línea de conducta que libremente ha adoptado el Cabildo Metropolitano, por unanimidad.

3.º Que la Santa Sede ha procedido siempre con suma delicadeza y bondad para con la Iglesia Argentina, no teniendo ésta más que motivos de gratitud hacia el Sumo Pontífice.

En cuanto a la personalidad de Monseñor Boneo, el Cabildo le profesa profunda veneración y aprecio, por sus virtudes y por haber pertenecido a su gremio largos años; siendo además el decano del Episcopado Argentino».

APENDICE IV.—Declaración del Colegio de Párrocos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, aceptando incondicionalmente, en nombre de todo el Clero Parroquial, el nombramiento del Administrador Apostólico.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1924.

«El honorable Colegio de los Curas Párrocos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, reunidos en sesión extraordinaria, declara:

Que se adhiere enteramente a las declaraciones formuladas por el Venerable Cabildo metropolitano, el 7 del corriente mes, las que interpretan el sentir unánime del «Clero de esta Arquidiócesis, que es de doctrina íntegra y de completa adhesión a la Santa Iglesia Católica».

Que, con motivo de los actuales acontecimientos, ratifica una vez más su profundo respeto, su incondicional obediencia y su invariable acatamiento a la suprema autoridad del Pontífice Romano.

Que acata con toda veneración, y presta desde ahora su homenaje de obediencia al dignísimo Administrador Apostólico del Arzobispado de Buenos Aires, monseñor Juan Agustín Boneo».

C. DE C. C.

(Marzo de 1925).